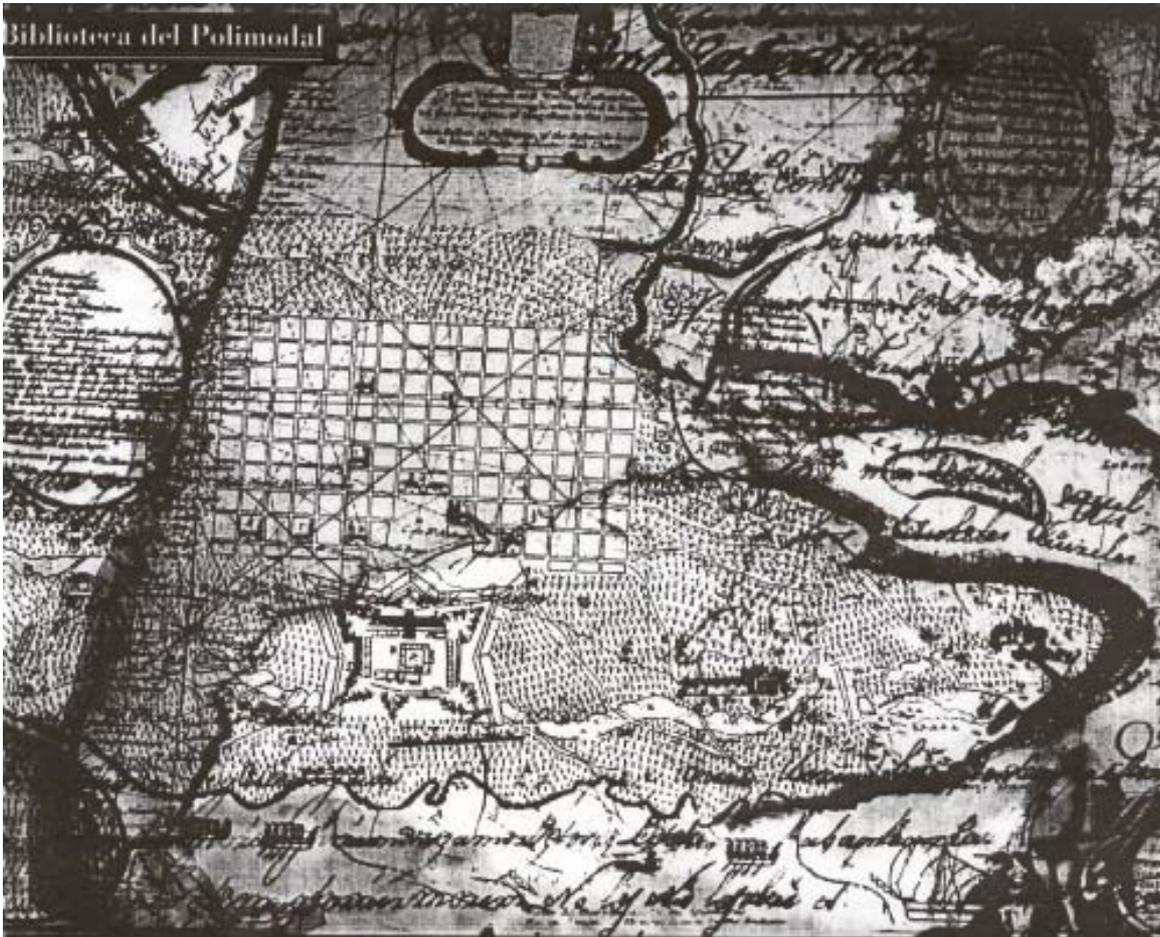


Biblioteca del Polimodal



# HISTORIA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA

Emilio Miranda Edgardo Colombo



## La política

### El Proceso de Reorganización Nacional

El 24 de marzo de 1976 fue destituida la presidenta María Estela Martínez de Perón. En su reemplazo, las Fuerzas Armadas asumieron la conducción política del país a través de una Junta de Comandantes conformada por Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). Videla asumió la primera magistratura. El clima en el que se desarrollaban estos hechos era de angustia generalizada debido a la concurrencia de varios factores: la multiplicación de conflictos entre los miembros del gobierno peronista, la inseguridad física y la explosión inflacionaria del período comprendido entre diciembre de 1975 y marzo de 1976. Este marco reflejaba la disolución del poder estatal para dirimir conflictos y conducir la economía.

En un primer momento, los sectores empresariales apoyaron la nueva intervención militar. Tanto las Fuerzas Armadas como los actores sociales que acompañaron el golpe militar señalaban que el estancamiento crónico de la economía y la profunda inestabilidad del sistema político eran el resultado de la contraposición entre dos proyectos antagónicos. El primero de ellos era el sustentado por la burguesía agraria consolidada a partir del afianzamiento del modelo agroexportador en el siglo XIX y parte del XX. Según el diagnóstico de los nuevos gobernantes, esa burguesía habría proporcionado a nuestro país un período de florecimiento económico, social y político y, en definitiva, la única verdadera fuente de riquezas en toda su historia. El segundo proyecto era el que se había desarrollado con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Sostenían este proyecto, por un lado, un empresariado nacional dependiente de los subsidios y las protecciones del Estado y, por el otro, los sectores sindicales vinculados a la industria y el sector servicios. Este último conjunto de actores -representado políticamente por el peronismo- se había transforma-

do en una alianza con poder suficiente para fijar los precios internos y los salarios, con independencia de los valores internacionales y en perjuicio del sector agrario. Según la interpretación de quienes tomaron el poder en marzo del 76, esa alianza utilizaba el aparato estatal en su propio beneficio, mediante una dinámica de concesiones mutuas que perjudicaban al conjunto de la sociedad.

El «empate» entre estas dos formas de desarrollo incompatibles, industria sobreprotegida versus producción agropecuaria exportable, era el causante directo de la inestabilidad política, la inflación y las dificultades para un crecimiento sostenido. Uno de los objetivos centrales del Proceso sería precisamente intentar romper ese «empate» en favor de las actividades agropecuarias, reduciendo al máximo el poder político del otro sector en pugna. Paralelamente, se crearía una nueva clase dirigente que encauzaría en el futuro esos cambios a través de la senda republicana.

Desde 1976 se puso en práctica el plan económico de José A. Martínez de Hoz, destinado a producir un cambio drástico en la estructura económica. Los efectos sociales y políticos de las medidas adoptadas no se hicieron esperar. La falta de protección arancelaria en algunas áreas productivas provocó la quiebra de innumerables empresas expuestas a la competencia internacional y la transformación de miles de trabajadores industriales en cuentapropistas: los dos sectores sociales en que se apoyaba el Estado benefactor comenzaban así a debilitarse.

Paralelamente, las entidades bancarias y financieras, alentadas desde el poder estatal, se multiplicaron. El sistema económico comenzó a girar en torno de estas instituciones, cuyo papel estaba sobredimensionado por el estímulo del Estado. Así se generó lo que se denominaría la «patria financiera».

En 1980-1981, cuando el sistema colapsó, una gran cantidad de pequeños ahorristas perdieron sus depósitos debido a la quiebra de importantes bancos. A esa altura, casi la totalidad de los sectores sociales que habían apoyado el Proceso comenzaban a mostrar signos de rechazo hacia el plan económico a través de sus organizaciones corporativas; a la crítica de la CARBAP en 1979 se le sumó la de la UIA, que hacia 1981 censuró duramente el Proceso Militar.

Por su parte, y a pesar de las persecuciones y los encarcelamientos, los trabajadores lograron articular medidas de protesta al promediar la gestión de Martínez de Hoz, como el paro organizado por una de las centrales obreras. El gobierno de Videla tuvo que sortear, entre otras dificultades, la amenaza de una inminente guerra con Chile por problemas limítrofes en el área del Canal de Beagle y una sublevación militar encabezada por Luciano B. Menéndez.

## El terrorismo de Estado

Uno de los objetivos centrales de los militares era desarticular, acallar y eliminar a los sectores que protagonizaron el gran cuestionamiento social de comienzos de los 70.

Las Fuerzas Armadas se propusieron terminar con la amenaza que, según ellas, todavía representaban para el país las organizaciones guerrilleras de origen peronista y marxista. El accionar de las Fuerzas Armadas había comenzado en 1975, merced a una orden emanada del gobierno de Isabel Perón. En ese momento se intensificó la lucha contra los grupos insurreccionales instalados en Tucumán, que habían adoptado la forma de guerrilla rural. En las ciudades, el tipo de acción predominante de la guerrilla era diferente y exigía una mayor tarea de inteligencia para combatirla. En ambos casos, el objetivo prioritario del Ejército, la Armada y la Marina fue terminar con los grupos armados, pero también remover aquellos sectores que, sin participar directamente en los grupos armados de izquierda, constituían su apoyo y fuente de reclutamiento.

Las juntas militares llevaron a cabo una detallada planificación a nivel nacional de la represión de las organizaciones armadas. Se montaron centros de detención clandestinos y los denominados «grupos de tareas» procedieron al arresto de personas, en su gran mayoría jóvenes, sin recurrir a las vías judiciales. Este fue el

origen de los «desaparecidos»: víctimas de la represión cuyo paradero o restos en la mayoría de los casos nunca fueron identificados. Los detenidos-desaparecidos no eran sólo miembros de las organizaciones armadas; simpatizantes de la guerrilla, activistas sociales e integrantes de las comisiones internas de fábricas también fueron objeto de los grupos represivos. En definitiva, el peso de la represión estatal se hizo sentir sobre toda expresión de protesta o cualquier proyecto de una sociedad alternativa.

En los centros de detención se aplicaban sistemáticamente diversos métodos de tortura para extraer información de los detenidos. En la mayoría de los casos, la detención ilegal de ciudadanos culminaba con la muerte, destino que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) alcanzó una cifra cercana a las 9.000 personas -los organismos de derechos humanos denuncian alrededor de 30.000. Asimismo se registraron numerosos casos de apropiación ilegítima de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres desaparecidas. El grueso de este accionar se desarrolló hasta 1978, cuando ya era un hecho la desarticulación del ERP y Montoneros. En 1979, la Junta Militar recibió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que realizó un informe de alto contenido crítico sobre la situación de los

derechos humanos en la Argentina. Esta fue sólo una de las innumerables denuncias que se realizaron en contra del gobierno militar, sobre todo desde el exterior. I

Las madres de desaparecidos comenzaron a organizarse desde los primeros años del gobierno militar para indagar sobre el paradero de sus hijos y nietos. En sus reuniones de los jueves, caminaban alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo para evitar la dispersión por parte de la policía. Así nació una de las agrupaciones pioneras de la resistencia contra el gobierno militar: las Madres de Plaza de Mayo.  
¿Qué otras organizaciones buscan actualmente esclarecer el destino de los desaparecidos?  
¿Cuáles son sus reclamos y qué métodos utilizan?



## El resurgimiento de la oposición y la guerra de Malvinas

Al finalizar el gobierno de Videla era notorio que muchos de los objetivos planteados por el Proceso no se habían logrado: la crisis de disolución del Estado que comenzó en 1975 se había profundizado y había envuelto también a los militares en el poder. Hacia 1981 no había indicios de la formación de una nueva clase dirigente, a pesar del apoyo decidido de políticos e intelectuales de derecha a los militares. Además, buena parte de la clase empresarial había enajenado su apoyo al gobierno.

Hacia octubre de 1980 fue designado en reemplazo de Videla el general Eduardo Viola. Sin embargo, el recambio generó en el seno de las Fuerzas Armadas enfrentamientos internos que rompieron su unidad. El sucesor jerárquico de Videla en la jefatura del Ejército durante el Proceso, Viola, debió asistir como presidente de facto no sólo al fortalecimiento de la creciente oposición civil (nucleada en la denominada Junta Multipartidaria) y el fracaso del plan económico, sino también al desarrollo de las apetencias políticas personales de sectores de la Marina (representados sobre todo por el almirante Massera)

y del tercer comandante en Jefe del Ejército durante el Proceso, Leopoldo F. Galtieri. Este último finalmente logró desplazarlo de la presidencia un año más tarde.



La revista Humor, fundada en junio de 1978, comenzó como una publicación de humor general, para profundizar más tarde la veta de la crítica al régimen militar y la sátira política.

**.Investiguen cuál fue la actitud de los principales medios de prensa durante el Proceso.**

## La economía

### La política económica del Proceso

El gobierno de Isabel Perón fue derrocado en marzo de 1976 en el contexto de una profunda crisis económica. Esta (que respondía a los mecanismos cíclicos de la economía argentina) se produjo en el marco de una crisis financiera internacional que daría pie a una depresión económica mundial, que se inició en 1973 y llegaría hasta los años 90. Esta crisis significaría el fin de las políticas del Estado de Bienestar, sistema que progresivamente retrocedería en Occidente. El fenómeno más característico de aquella crisis fue la aparición de la estanflación; este término se acuñó para designar un fenómeno novedoso, la conjunción de inflación de precios y estancamiento de la actividad económica. Con el correr de los años, la crisis originaría la puesta en marcha de nuevas formas de organización del trabajo industrial, la aplicación de modernas tecnologías en la producción y una redefinición de las relaciones sociales en todo el mundo capitalista.

En abril de 1976, los militares dueños del poder en la Argentina pusieron en marcha un plan económico encabezado por el ministro de Hacienda Martínez de Hoz. Este plan, que pretendía combatir la inflación, sería complementado en 1977 con una profunda reforma financiera. Los economistas del gobierno militar adherían a la escuela monetarista\* y aplicaban así los supuestos de apertura de la economía que proponía aquella corriente de pensamiento económico. Se trataba de una forma de liberalismo económico a ultranza que se aplicó también en otros países periféricos (coincidiendo a menudo con el establecimiento de dictaduras, como en el caso de Chile bajo el gobierno de Augusto Pinochet).

El plan económico pretendía fomentar las actividades en las que el país manifestaba ventajas comparativas. Al mismo tiempo, imponía al

Estado la obligación de abstenerse de intervenir en la economía, de modo de garantizar las condiciones para una efectiva competencia que estimulara la productividad de las empresas y aumentara su eficiencia. En realidad, la renuncia del Estado a intervenir en la economía y promover determinados grupos económicos no fue absoluta.



La política económica de Martínez de Hoz tuvo efectos devastadores sobre los sectores de la población más apoyados por el Estado benefactor, que vieron retroceder notablemente sus niveles de vida.

**-Analicen los «trofeos» de la caricatura de Pratico publicada por Tía Vicenta en 1979. ¿Quiénes fueron los principales perjudicados por las medidas económicas de estos años?**

En términos generales, la política del Proceso significó un cuestionamiento de la industrialización y el mercado interno como motores de la economía argentina. Con el objetivo final de modernizar e incrementar su eficiencia, se

implantó una política basada en un programa de liberalización y apertura de los mercados que desamparó casi completamente un sector de la industria y el poder adquisitivo de la población.

## La desindustrialización argentina y los «capitanes de la industria»

La meta de modernizar la estructura económica argentina suponía, según el plan de Martínez de Hoz, restaurar las condiciones ideales del mercado eliminando toda intervención del Estado. De esta manera se lograría aumentar la eficiencia de las empresas para adecuarlas al mercado internacional. El fomento de la competencia implicaba supuestamente la eliminación de toda protección estatal para una industria local cuya productividad dejaba mucho que desear.

Esta deliberada falta de protección, que permitiría sobrevivir sólo a quienes más esfuerzos realizaran por aumentar su productividad, se llevó acabo a través de la reducción de los aranceles que gravaban los bienes importados. La baja de los derechos de importación sumada a una moneda sobrevaluada derivaron en un irracional crecimiento de las importaciones.

La industria local, imposibilitada de competir con los productos importados, entró en su peor recesión por varias razones. Por un lado, no podía competir con la producción de los países centrales, que tradicionalmente ostentaban una mayor productividad. Además, se importaron productos de nuevos países industrializados del Extremo Oriente (como Corea y Taiwan), cuyos precios eran menores porque los costos de mano de obra eran más bajos. Por último, la industria argentina, aun la que había surgido de la radicación de empresas transnacionales, se había acostumbrado a trabajar con un mercado protegido y se había preocupado poco por lograr aumentos de productividad.

Además de la competencia extranjera, la industria local debió enfrentar el encarecimiento del crédito provocado por el alza de las tasas de interés. Por último, la política socioeconómica del Proceso redujo en gran medida el poder adquisitivo de los sectores populares, causando una considerable disminución del mercado interno.

Estas circunstancias produjeron un colapso en las pequeñas y las medianas empresas y dieron pie al proceso de desindustrialización.

Un efecto de la recesión industrial fue la fuerte concentración económica producida en aquellos años. Esta se derivaba de la serie de quiebras que afectaron el sector, pero también respondía a la creación de redes de empresas alrededor de bancos o entidades financieras con fuertes contactos con el Estado. Se trataba de los denominados «capitanes de la industria», que lograban escapar entonces de la crisis mediante distintas estrategias.

Estas empresas tenían una implantación multisectorial, es decir, que podían transferir capitales con rapidez de un sector a otro (industria, finanzas, explotación agropecuaria) y contaban con la liquidez suficiente como para aprovechar la especulación financiera. Por otro lado, usufructuaban determinados beneficios que ofrecía el Estado, como subsidios o ciertos regímenes de promoción industrial que se mantuvieron (como el de la industria automotriz) y la garantía estatal ante los acreedores externos. Pero el principal estímulo era su condición de proveedores del Estado (como ocurrió con las empresas cementera que aprovecharon la ola de obras de vialidad de aquella época). El déficit del Estado hacía imposible que este cumpliera a tiempo con sus obligaciones. Sin embargo, esto no perjudicaba a sus proveedores, sino todo lo contrario: la renegociación de contratos se convirtió para muchas empresas en un mecanismo que generaba ganancias.

Los resultados finales de la experiencia económica del Proceso fueron nefastos. En primer lugar, la deuda externa sería de allí en más la amenaza con la que lidiarían los gobiernos democráticos y condicionaría cualquier política gubernamental. En segundo término, la desindustrialización del país daría lugar desde



La desindustrialización produjo también un cambio del paisaje urbano: proliferaron las fábricas abandonadas, conocidas como cementerios industriales. En años posteriores, muchos de esos solares fueron ocupados por centros de actividades terciarias de la economía. En este caso, en la ciudad bonaerense de Avellaneda, donde se radicó uno de los primeros frigoríficos de capitales nacionales, se encuentra instalado actualmente un hipermercado.

¿Identifican en sus barrios procesos similares? ¿Cuáles son las consecuencias?

entonces a un proceso de terciarización de su economía, es decir, una preponderancia de la actividad terciaria (comercio y finanzas) sobre la producción primaria y secundaria. En tercer lugar, sería el comienzo de una fuerte concentración que haría del predominio de los grandes grupos económicos un dato incuestionable. Es-

tos, junto con los acreedores extranjeros, se convertirían en los tutores del Estado argentino: tendrían la capacidad de vetar cualquier política económica gubernamental que fuese contra sus intereses, demostrando así un poder mayor que el del propio Estado.

## La economía en el período radical

La política económica del gobierno de Raúl Alfonsín intentó en un principio responder a las fuertes demandas de equidad social que el proceso de restauración de la democracia había generado en la población. Se trataba, entonces, de mejorar los ingresos de los sectores populares a través de aumentos de salarios, y de reactivar el mercado interno con el otorgamiento de créditos a medianos empresarios. Como contrapartida se buscaba eliminar la inflación, combatir el déficit público y mejorar la recaudación fiscal.

Sin embargo, el partido gobernante, al llevar adelante prácticas similares a las que había

implementado la última vez que había estado en el poder (1963-1966), revelaba su incapacidad para medir las dimensiones de la grave situación económica. Las dificultades que debía enfrentar el gobierno eran completamente distintas de las que había tenido que sortear cualquier gobierno previo a 1976: la deuda externa, cuyo volumen siguió creciendo a pasos agigantados tan sólo con la acumulación de intereses; el déficit de un Estado desvencijado tras años de abusos y falta de inversión y, por último, una inflación incontrolable desde los años finales del Proceso y que se había instalado en los comportamientos económicos de la población (ahorros en dólares, depósitos a plazo fijo, etcétera).

Antes del año de su implementación, las primeras medidas económicas del gobierno radical habían terminado en fracaso. La creciente inflación, la fuga hacia el dólar, el servicio de la deuda externa, la falta de nuevas inversiones debido a los altos costos, el desequilibrio de la balanza comercial y la ausencia de financiamiento externo condujeron la economía hacia un desborde inflacionario. El estancamiento de la economía se conjugaba con una fuerte precariedad del sector externo: el deterioro de los precios argentinos en el exterior señaló, además, el agotamiento del empuje que el agro había recibido desde los años 60. En la década del 80 se produjo un cierre de mercados, principalmente en la Comunidad Económica Europea, que pasó en esos años a subsidiar su propia agricultura, reduciendo las importaciones extracomunitarias como las argentinas.

En junio de 1985 se anunció un nuevo plan económico, el «Plan Austral», cuyo objetivo principal era superar la crisis coyuntural y estimular la economía en el largo plazo. Las medidas que el ministro Juan Sourrouille anunció para detener la inflación fueron el congelamiento de salarios, precios y tarifas de servicios públicos; la eliminación de la emisión monetaria y el control de cambios y tasas de interés. Todo ello en conjunción con un cambio en la moneda nacional: se reemplazó el peso por el austral. Hasta fines de 1985, la inflación fue controlada gracias al apoyo de los grupos empresariales. Asimismo, no hubo caída de la actividad ni desocupación, ya que no se produjeron despidos. Se mejoró la recaudación, pero no se redujeron los gastos del Estado.

A fines de 1985, el aumento de la inflación y las dificultades en el sector externo estimularon las pujas corporativas, tanto por parte de los sindicatos nucleados en la CGT, como de las distintas organizaciones de empresarios. El gobierno, por otra parte, contaba con una base política escasa: la oposición justicialista en el Congreso tenía la capacidad de vetar sus iniciativas legislativas. Fue entonces cuando el gobierno comenzó a apoyarse en los grupos empresariales y se perfilaron cambios más profundos (reforma fiscal, proyectos de privatización de empresas públicas y desregulación de la economía).

En julio de 1987 se implementó un nuevo plan de reformas, avalado por los organismos de crédito internacionales, que consistía en una reforma impositiva, privatizaciones de empresas estatales y reducción de gastos. Desde el comienzo, este plan no tuvo apoyo político de la oposición peronista en el Poder Legislativo, ni de la población en general.

Los resultados económicos fueron escasos, y en agosto de 1988 se aplicó un nuevo plan llamado «Primavera» con el objeto de controlar la inflación hasta las elecciones del año siguiente. Este plan implicó nuevos impuestos, que tenían por finalidad lograr el equilibrio en las cuentas del Estado, y el congelamiento de precios, salarios y tarifas, pero terminó en un fracaso. A principios de 1989, la negativa del Banco Mundial y el FMI para librar créditos a la Argentina produjo un descontrol total de la economía. Se devaluó el austral, se produjo una corrida hacia el dólar y se desató la hiperinflación.

## **Las transformaciones económicas y el fin del Estado benefactor**

Desde que Menem asumió la conducción política del país en 1989, se implementó una serie de cambios estructurales de la economía que significó una verdadera revolución en el capitalismo argentino. En la práctica, su gestión impli-

có un viraje de ciento ochenta grados con respecto a las concepciones sobre el funcionamiento de la economía que mantenía tradicionalmente el partido peronista. Este viraje debe ser analizado en el contexto del proceso hiperinflacionario

en que había colapsado el gobierno saliente, que hizo tomar conciencia de la necesidad de reformas estructurales en la economía y el Estado con la activa participación de los grupos económicos dominantes. Esto constituyó el reconocimiento implícito de la impotencia del Estado para entablar políticas autónomas.

Pese al inicial rebrote de la inflación, la alianza de poder se fortaleció con la incorporación de otros grupos económicos dominantes. Esta alianza confirió al gobierno la capacidad para lograr una estabilidad que nadie había obtenido desde 1955, y permitió la puesta en marcha de algunas leyes que constituyeron la piedra fundamental de la transformación económica. Entre ellas, la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica, así como también el decreto de Desregulación Económica y el programa de privatizaciones.

En este momento, se llegó a la culminación de las políticas de apertura y desregulación de la economía que con discontinuidad venían implementándose desde 1975. Este proceso concordaba, además, con la globalización de la economía mundial. Se procedió a una liberalización total de la actividad económica: liberación de los precios y la importación, eliminación de la promoción industrial y fin de la regulación del Estado sobre el mercado financiero. Paralelamente, comenzó un movimiento hacia la «flexibilización laboral», que modificaba la reglamentación de los contratos de trabajo y reducía la capacidad de negociación de las grandes organizaciones sindicales.

A fines de marzo de 1991, con Domingo Cavallo como titular de la cartera de Economía, se sancionó en el Congreso Nacional la Ley de Convertibilidad. La característica más importante de este programa fue el cambio de la moneda: el austral se reemplazó por un peso convertible. Esto significaba que el gobierno garantizaba por ley la fijación del tipo de cambio nominal (la paridad peso-dólar uno a uno, libremente convertibles), sólo modificable por medio de una reforma legislativa. El Estado se comprometía también a

garantizar la base monetaria con reservas suficientes en el Banco Central al que, por otra parte, se le imponían restricciones para emitir moneda (no así para endeudarse si los organismos internacionales tenían voluntad de prestarle): la creación de dinero quedaba supeditada a los resultados positivos del balance de pagos, de modo que no sería posible la emisión sin tener respaldo. El Plan de Convertibilidad implicaba también la eliminación de cualquier restricción a los movimientos de divisas y el condicionamiento de los aumentos salariales de acuerdo con los incrementos de la productividad.

El Plan de Convertibilidad tenía como trasfondo el crecimiento de la deuda externa. Esta, que había alcanzado a mediados de los 80 los 50.000 millones de dólares, se había vuelto prácticamente inmanejable. Solamente en concepto de intereses se pagaban 6.000 millones anuales, cifra que equivalía aproximadamente al 80% de las exportaciones del país. El gobierno de Menem trató de mejorar la relación con los acreedores externos. Logró una renegociación global de la deuda que implicó un compromiso de plan de pagos estricto, a cambio de una reducción y el apoyo de los organismos financieros internacionales para nuevos créditos.

El otro pilar del plan económico fue la privatización de las empresas públicas. Esta significaría una fuente de financiamiento para un Estado que estaba obligado, ante el compromiso de no emisión, a una reducción de gastos. En este punto, se procedió a la privatización de grandes empresas estatales (compañías telefónicas, de electricidad, de agua corriente, de ferrocarriles, de aviación, siderúrgicas, petroquímicas, etc.), al cierre de otras y a la paralización de obras públicas financiadas desde el Estado (con la consecuente transferencia o el despido de personal). Las empresas privatizadas quedaron en manos de consorcios conformados por representantes de diferentes nacionalidades, grupos locales, bancos y otras instituciones financieras. De esta reestructuración salieron beneficiados algunos grupos económicos que habían diversificado sus

actividades. Por otra parte, los usuarios de los servicios privatizados recibieron en algunos casos mejores prestaciones a partir de las nuevas inversiones que aumentaron el nivel de eficiencia, aunque también sufrieron aumentos en las tarifas. La ola de privatizaciones no era un asunto exclusivo del Estado argentino: se trataba de un fenómeno corriente en el mundo capitalista desde la crisis del Estado benefactor en la década del 70.

El hecho de que las privatizaciones se pagaran en general con títulos de la deuda externa facilitó que los acreedores extranjeros pudieran cobrar. Como buena parte de los recursos obtenidos con la venta de las empresas fueron derivados al pago de la deuda, el Estado se vio obligado a buscar nuevas fuentes de ingresos a través de un aumento de la presión fiscal. Por un lado, la reducción en los derechos de importación significó un aumento de la recaudación, pues aquella medida fomentó las importaciones, que se triplicaron entre 1990 y 1992. Pero a largo plazo la recaudación fiscal terminaría basándose en gran medida en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tributo indirecto que recae sobre la masa general de consumidores y no grava la riqueza. El descanso de las rentas fiscales sobre la recaudación de IVA provocaría que el Tesoro Nacional dependiera fuertemente del nivel general de la actividad económica. Si la economía se

reactivaba, como ocurrió en los primeros años de la gestión de Menem, la recaudación fiscal crecía. Pero si se producía una recesión, como la que tuvo lugar en 1995, el resultado era una disminución de las rentas públicas. Este sería uno de los aspectos más vulnerables del modelo económico.

Otro flanco débil del plan era su dependencia del flujo de capitales que ingresaban en el país para compensar el creciente déficit de la balanza comercial. En estos últimos años afluyeron capitales productivos, pero también ingresaron otros atraídos por las altas tasas internas de interés, que sólo tenían fines cortoplacistas. Ante una eventual crisis financiera internacional, como la que tuvo lugar en México a principios de 1995, conocida como «efecto tequila», o la de los mercados del Sudeste asiático, estos capitales se retiraban del circuito financiero argentino.

Entre los efectos positivos del plan, se asistió en todos estos años a un sensible aumento del PBI y una modernización general de la estructura económica. Esto se percibe en el área del consumo a partir del incremento de algunos rubros, especialmente aquellos que cuentan con una tecnología de avanzada.

La experiencia económica en este período profundizó una tendencia previa: la de la progresiva terciarización de la economía. La industria sería parcialmente desplazada por el sector de servicios y su manifestación más visible fue el auge de los hipermercados y los shoppings.

Un acontecimiento en la economía argentina fue la constitución de un mercado común con sus vecinos luego de la firma en marzo de 1991 del Tratado de Asunción. Como consecuencia de este acuerdo, se constituyó con Brasil, Paraguay y Uruguay el Mercado Común del Sur (Mercosur). En años posteriores se acordó la asociación parcial de Chile y se promovieron negociaciones con organizaciones pares de América del Norte (NAFTA, formada por Estados Unidos, Canadá y México) y de Europa (Unión Europea). Los países



Interpreten los cifras del cuadro según las alternativas de la economía en estos años. Averigüen cuál fue la evolución del PBI en el período 1955- 1976. Según lo leído en este módulo y el anterior, ¿cómo explicarían sus variaciones?

miembros del Mercosur establecieron una unión aduanera; esta medida implicaba la eliminación de tributos para el comercio entre los miembros y la fijación de un arancel externo común. El Mercosur también significó la constitución de distintos organismos para regular el comercio y la producción y el diseño de políticas macroeconómicas comunes.

La formación del Mercado Común del Sur constituyó una respuesta regional al creciente proceso de globalización de la economía mundial. Asimismo, resultó una salida para la restricción de las exportaciones que había provocado el cierre en los años 80 de la Comunidad Económica Europea. El socio mayoritario en el Mercosur sería Brasil; desde la conformación del mercado común, el comercio argentino con este país creció en forma espectacular (un 191% entre 1991 y 1994). La articulación de la economía nacional con la brasileña sería tal que algunos empresa-

rios argentinos consideraron que nuestro país comenzaba a depender de las decisiones de su vecino, en particular de sus medidas unilaterales, como la devaluación de su moneda.

La política económica de los gobiernos de Menem significó un corte de raíz con la sociedad del pasado. Produjo profundas transformaciones que, sobre todo durante su primer mandato, contaron con el apoyo de la población, que apreciaba el logro de la estabilización de precios luego de años de inestabilidad económica representados en los altos índices de inflación. Este aval de la población se mantuvo incluso a pesar de los efectos negativos como el desempleo y la concentración de riqueza en cada vez menos manos. La impronta de estas transformaciones en la economía nacional fue tal que el espectro político mayoritario las ha asumido como un dato incontrastable de la realidad.

## LA SOCIEDAD

### El reacomodamiento de los sectores sociales argentinos

Los cambios del modelo económico que se iniciaron a mediados de los años 70 tuvieron efectos notables sobre la estructura social argentina.

La alta concentración económica provocó un marcado proceso de polarización social. Por un lado, la elite había sufrido transformaciones respecto del pasado desarrollista de la década del 60. Junto a los grupos transnacionales crecieron en forma espectacular grupos locales empresariales, encabezados por algunas familias que en un primer momento hicieron de la asociación con el Estado su modus vivendi. Luego, con el fin del Estado interventor, estos sectores conservaron la posibilidad de invertir en ámbitos tales como la construcción de carreteras y edificios públicos y privados, etc., y amasar fabulosas ganancias.

A partir de esas riquezas acumuladas, los sectores dominantes han renovado y ampliado sus bases de consumo, acorde con lo que ocurre en otros lugares del mundo occidental. Los nuevos lujos y modelos sociales son exhibidos ostentosamente y copiados por un sector de las clases medias que hacen de la «imagen» su razón de vivir.

También dentro de estas últimas se ha registrado un proceso de cambio y diferenciación interna. Por un lado, un sector nada desdeñable se lanzó a revertir años de consumo restringido y economía cerrada. Son ejemplos de este fenómeno la difusión de las computadoras personales y la televisión por cable (nuestro país ocupa el segundo lugar en América en cuanto al número de abonados), así como los viajes al exterior y la renovación del parque automotor. La posibili-

dad de acceso al crédito hipotecario posibilitó asimismo que una porción de los sectores medios pudiera comprar una vivienda, aunque mediante un endeudamiento por años y con altas tasas de interés. La difusión masiva de los servicios financieros (como las tarjetas de crédito y compra) posibilitaron atemperar la realidad de los magros salarios. El ahorro y la previsión característicos de otros tiempos parecen perder importancia como valores culturales de estos sectores.

Por otro lado, parte de la clase media perdió posiciones y actualmente se equipara con los sectores trabajadores, sobre todo a partir de la depresión de sus salarios. También los pequeños comerciantes, doblegados en gran medida por la competencia de las grandes cadenas de comercialización, se han transformado en asalariados. Sin embargo, los cambios más notables se produjeron en los sectores populares. En los últimos años, las transformaciones en la estructura económica han tenido indudable incidencia en su conformación social como clase y también en su poder sindical.

La población económicamente activa, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Es-

tadísticas y Censos (INDEC), se concentraba hasta 1980 en las edades intermedias. Hasta esa fecha, la edad de ingreso en el mercado laboral se había ido incrementando progresivamente, fruto del funcionamiento pleno del Estado de Bienestar, que permitía la ampliación y la extensión del sistema educativo y la mejora de los ingresos medios de las familias. En cuanto a la edad de egreso, disminuía gracias a la expansión del sistema previsional.

Por el contrario, el último período intercensal (1980-1991) marcó una extensión de la población económicamente activa en los extremos de la pirámide poblacional. La tasa de actividad de los más jóvenes ascendió respecto de registros anteriores, debido a la menor capacidad de retención del sistema escolar y la mayor necesidad de ingresos por parte de los hogares, tendencia que se proyecta hacia el futuro.

Por otra parte, la tasa de actividad de la población de entre cincuenta y cinco y sesenta y cuatro años aumentó del 39% al 49% en el mismo período. Este dato resulta más significativo si añadimos que la tasa para los de sesenta y cinco y más años creció del 10% al 17%, invirtiendo la tendencia sistemática a la baja registrada desde 1947.

El deterioro de los haberes previsionales

<b>ESTRUCTURA OCUPACIONAL ARGENTINA, 1980-1991</b>		
Fuente: INDEC: Censos Nacionales de Población		
	1980	1991
Sector público		18,0
Sector privado		40,0
Servicio doméstico		7,0
<b>ASALARIADOS</b>	<b>71,6</b>	<b>65,0</b>
Cuenta propia	19,5	23,0
Familiares sin remuneración fija	3,1	5,0
Patrones	5,8	7,0
<b>NO ASALARIADOS</b>	<b>28,4</b>	<b>35,0</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

provocó que las personas de edad avanzada tendieran a permanecer en el mercado laboral posponiendo su retiro, al mismo tiempo que los ya jubilados se vieron impulsados a retornar a la actividad. Por otra parte, los cambios en las leyes previsionales tendieron a aumentar la edad requerida para acceder al beneficio de la jubilación.

Otro cambio significativo en los últimos años ha sido el ingreso masivo de las mujeres en el mercado laboral: el deterioro de los ingresos familiares obliga a incorporar más miembros asalariados por hogar.

El proceso de desindustrialización que se inició en los años 70 ha tenido dos efectos en la estructura ocupacional: por un lado, el descenso del porcentaje de población vinculada al sector secundario; por el otro, el crecimiento significativo de los sectores no asalariados.

Si bien esta tendencia comenzó a manifestarse en los 70, el crecimiento de los no salariables en la década siguiente duplicó el registrado por los asalariados. Por cada cien puestos de trabajo generados entre 1980 y 1991, sesenta y cinco correspondieron a no asalariados. Además, la inserción laboral dentro de este último grupo puede ser calificada de informal por ser inestable, discontinua y precaria -desde el punto de vista de su cobertura social y previsional.

Hasta comienzos de la década del 90, la situación laboral se había caracterizado por un nivel relativamente bajo de desocupados (lo cual constituía un dato central de los últimos cuarenta años en el mercado laboral). Sin embargo, en el último decenio asistimos a un fenómeno nuevo en la Argentina contemporánea: la desocupación estructural.

La aparición de un ejército de

reserva en el mercado laboral comenzó a repercutir en forma directa en la merma de la capacidad de respuesta de los sindicatos que, además de ver en algunos casos raleadas sus filas por la disminución relativa de sus afiliados, debieron enfrentar la realidad concreta de una competencia por los puestos de trabajo cuyo efecto es mantener deprimido el salario.

Por otro lado, la modernización de la estructura económica argentina y la globalización han equiparado los estándares productivos de las empresas en la Argentina con sus similares en otros países. La necesidad de las empresas de competir a nivel internacional las impulsó a buscar el máximo de productividad. Esto se tradujo en reducciones de personal que provocaron sensibles cambios en su organización interna. La incorporación de tecnología de punta redundó asimismo en la disminución de los trabajadores requeridos, al mismo tiempo que se comenzó a exigir un mayor nivel de capacitación y «compromiso» con las tareas realizadas.

De esta forma se combinan tendencias que comenzaron en décadas anteriores (pérdida de estabilidad, terciarización, descenso constante de



la proporción de asalariados, etc.) con factores nuevos que tienden a desestructurar un sector social que ha perdido la consistencia y la fuerza del pasado industrial.

El balance de las transformaciones registradas en la estructura social argentina desde la década del 70 muestra una ampliación de la dis-

tancia entre los que más y los que menos tienen, con sectores medios que según los casos se desplazan hacia un lado o el otro. La polarización social se observa en el grado en que se asumió la concentración de la riqueza como un dato de la realidad y el debilitamiento de las redes sociales características del Estado benefactor (servicios públicos, entidades intermedias, etc.).

.Según la información que aporta el gráfico, ¿qué sector aumentó su participación en el ingreso en los últimos años? ¿Cuál disminuyó? ¿Qué sector no se vio afectado? ¿Por qué?

<b>PARTICIPACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR GRUPO (del décimo más pobre al décimo más rico)</b>			
	<b>1975</b>	<b>1991</b>	<b>1998</b>
<b>1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,5</b>
<b>2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>
<b>3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>
<b>4</b>	<b>6,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>
<b>5</b>	<b>7,3</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
<b>6</b>	<b>9,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>
<b>7</b>	<b>10,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
<b>8</b>	<b>12,5</b>	<b>11,9</b>	<b>11,5</b>
<b>9</b>	<b>16,4</b>	<b>16,1</b>	<b>16,0</b>
<b>10</b>	<b>24,6</b>	<b>34,6</b>	<b>36,7</b>

Fuente: INDEC: (Encuesta permanente de Hogares)

## **El movimiento obrero, del Proceso al gobierno de Menem**

Los efectos del Proceso de Reorganización Nacional sobre el movimiento obrero fueron devastadores. La implementación de un plan económico de corte liberal que se proponía transformar la economía y la sociedad implicaba la desarticulación de todo intento posible de protesta y resistencia obrera. Para ello, fueron declarados ilegales e intervenidos diversos sindicatos, la CGT y las 62 Organizaciones, a la vez que muchos dirigentes fueron encarcelados.

Sin embargo, pese a la represión, que incluía la ocupación de plantas fabriles por la policía y el ejército, existieron protestas obreras durante todo el Proceso. Estas giraron alrededor de cuestiones salariales (dado que las comisio-

nes paritarias habían sido anuladas), la defensa de las condiciones de trabajo y la desocupación, sobre todo a partir de 1980 y 1981, cuando los índices de desempleo aumentaron. No hay duda de que aunque en forma «molecular», es decir, desde los propios ámbitos laborales, hubo durante todo el período de la dictadura militar una insistente resistencia de los trabajadores a las políticas estatales y los avances de las empresas sobre sus derechos adquiridos.

Desde el punto de vista de su organización, el movimiento sindical comenzó a recuperar en esos años su poder de movilización para el desarrollo de las actividades reivindicativas. Esto quedó demostrado en forma clara a través de la

huelga general contra los militares que se llevó a cabo el 27 de abril de 1979, pese a la división en el seno del movimiento obrero. Los paros generales de julio de 1981 y especialmente el del 30 de marzo de 1982, que culminó con una feroz represión, no hicieron más que confirmar esta recuperación y el clima de protesta generalizada que se difundía por la Argentina.

Si bien las luchas sindicales durante todo el Proceso lograron poner algunos límites precisos a la política gubernamental y las iniciativas de las empresas, no pudieron impedir los retrocesos de orden global vinculados a la desindustrialización, la terciarización de la economía y la mayor precariedad del empleo. La participación de los trabajadores sindicalizados en la industria cayó del 38% (1975) al 31% (1984-1986). Por su parte, en el sector comercio subió del 41% al 51% en el mismo período.

Cuando Raúl Alfonsín asumió la primera magistratura en 1983, intentó imponer un modelo de Estado que podía gobernar por encima de los principales actores sociales. Para ello era necesario desarmar la capacidad de respuesta del sindicalismo, de forma de alinearlos con los objetivos del Estado. A tales fines, se intentaría desde el gobierno cambiar la estructura de los sindicatos a través de la Ley de Reordenamiento Sindical o «Ley Mucci». El proyecto de la UCR, si bien admitía la unidad sindical (la existencia de una única representación por rama de actividad), exigía la existencia de organizaciones sindicales con pluralismo ideológico y estructuras y mecanismos democráticos de representación de minorías. La UCR, que carecía de base sindical propia, se planteaba así promover desde afuera de los gremios un nuevo sindicalismo. Las respuestas del gremialismo -amenazadas sus bases de poder- no se hicieron esperar. Este sindicalismo, más débil por el menor peso de los trabajadores industriales en la economía y por sus propias divisiones, estableció una política de confrontación que se tradujo en trece paros generales durante la gestión de Alfonsín. En el corto y el mediano plazo, esa política de confrontación tuvo

éxito en tanto neutralizó los intentos del radicalismo por modificar la estructura de funcionamiento del movimiento obrero.

Una vez refrenada la ofensiva gubernamental, la dirigencia sindical tradicional pudo, por medio de elecciones, recuperar y fortalecer sus posiciones. Pero de hecho comenzaron a sentirse en su seno los efectos de la disparidad de poder y estrategias. Por un lado, el grupo de sindicatos más grandes negociaba con sus respectivas cámaras patronales y así conseguía mejoras salariales. Incluso un sindicalista fue nombrado ministro de Trabajo. Por otro lado, la CGT, apoyándose sobre todo en la imagen de Saúl Ubaldini, desarrolló una política de enfrentamiento con el gobierno y sus planes económicos a partir de los gremios más contestatarios, pero de peso productivo significativamente menor.



La táctica de paro y movilización terminó convirtiéndose en una gimnasia desgastante para el sindicalismo, que agotaba casi todos sus impulsos en demostraciones de fuerza.

En la foto, la movilización de la CGT del viernes 8 de setiembre de 1988, el «viernes negro», que terminó en una serie de graves disturbios.

El tiempo reveló las limitaciones de un accionar sindical centrado en las demandas al Estado, que no daba cuenta de los cambios sufridos en la estructura social argentina, los escasos recursos estatales y la finalización de un modelo de desarrollo orientado hacia el mercado interno y la redistribución estatal de los recursos.

Las políticas implementadas por el Estado desde 1989 pusieron una bisagra histórica en sus relaciones con los trabajadores. Hasta ese momento el sindicalismo había ocupado el lugar que todas las sociedades industriales de la segunda posguerra le reservaban. En la Argentina, ese papel había estado fuertemente determinado por la aparición de un tipo de Estado particular, el Estado benefactor peronista. Con él, quedaría modelado un sindicalismo atado a las decisiones gubernamentales, dado el papel de árbitro que asumió el Estado en las disputas con los empresarios. Esta aceptación de una posición subordinada no le impidió -bajo otras condiciones políticas luego de 1955- oponerse fuertemente a las políticas estatales contrarias a sus intereses. Sin embargo, el abandono implícito o explícito que hizo el Estado del programa de industrialización fue erosionando la base sobre la que se había forjado su poder.

La ofensiva del Estado iniciada en 1989 produjo confusión y una verdadera diáspora entre las filas sindicales. Si bien la mayoría de los gremios prosiguieron en la CGT, surgieron agrupaciones alternativas como la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). La primera resultó de la reunión de gremios que cuestionaban la política oficial, básicamente la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y orga-

nizaciones combativas del interior del país.

La ofensiva gubernamental tomó forma en los proyectos de flexibilización laboral, a través de algunas reformas institucionales: Ley de Empleo (creación de nuevas modalidades de empleo como los contratos por tiempo determinado, la fijación de un tope para las indemnizaciones, etc.), reglamentación del derecho de huelga, revisión de los convenios co-



Una de las acciones gremiales más novedosas de los últimos años ha sido la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por iniciativa de la CTERA. Desde allí se han reivindicado mejoras salariales y de las condiciones educativas.

¿Qué reacciones ha generado en la opinión pública esta forma de protesta?

lectivos de los trabajadores del Estado y supeditación de los aumentos de salarios a los incrementos de productividad. A ello se sumó la modificación del régimen de obras sociales, vital para el financiamiento de las arcas sindicales.

Este conjunto de políticas introdujo modificaciones sustanciales en las relaciones entre el Estado y los sindicatos. La imposición de aumentos de salarios según productividad requería una discusión por ramas y no por sectores, como tradicionalmente se hacía. Significaba, en los hechos, modificar las convenciones colectivas de trabajo. En agosto de 1993, la UOM y la SMATA fueron los primeros gremios que aceptaron las cláusulas de reforma, al acordar una serie de políticas con las empresas automotrices. Posteriormente, otros sectores (textiles, siderúrgicos, metalmecánicos y electrónicos) se incorporaron a esta modalidad de aumento salarial de acuerdo con rendimientos. En lo concerniente a la relación entre empresarios y sindicatos, la Ley de Empleo introdujo también modificaciones importantes. Por un lado, estableció nuevos regímenes laborales a través de la polivalencia (que permitía la circulación de un trabajador por diversos puestos dentro de la unidad productiva).

Estas reformas condujeron a una pérdida paulatina del peso político y social del sindicalismo tradicional. En su reemplazo surgieron en los últimos años acciones de protesta más inorgánicas.

Trabajadores y desocupados ensayaron en los últimos años acciones de protesta espontáneas, como los cortes de ruta.



## La sociedad argentina en el nuevo siglo

En los últimos años, la sociedad argentina asistió a una serie de sensibles cambios en ámbitos tan dispares como la estructura familiar, el hábitat, las costumbres y las formas de expresión.

La estructura familiar ha adquirido nuevos rasgos. A los cambios en las relaciones generacionales característicos de las décadas de los 60 y los 70, se sumaron otros, fruto de las modificaciones legislativas en los 80 que no hicieron más que reconocer la existencia de numerosas situaciones de hecho. En efecto, la sanción de la Ley de Divorcio Vincular en 1987 permitió sincerar separaciones de larga data. Por otro lado, la institución matrimonial parece haber perdido el significado que ostentaba en el pasado. En la Capital Federal, la cifra de casamientos celebrados se redujo de 21.957 en 1990 a 16.000 en 1995. Inversamente, lo que ha aumentado es la cantidad de parejas que viven bajo el

mismo techo sin unión legal o religiosa. La boda, que antes constituía el símbolo de inicio de la vida conyugal, ahora es un paso que puede darse o no en el transcurso de la relación. En este nuevo panorama, que los hijos de padres separados vivan en dos casas o dentro de familias «ensambladas» ya no sorprende a nadie.

Las modificaciones en el paisaje urbano no son menos significativas. Por una parte, las principales ciudades argentinas comenzaron a poblarse en los últimos años de centros de recreación y consumo similares a los de los países desarrollados: los shoppings y los hipermercados. Muchos de estos «paseos de compra» han sido montados sobre antiguos establecimientos industriales, y es allí donde los sectores medios y populares disfrutaban de gran parte del tiempo libre. Así, asistimos a un tipo particular de cultura, en el que la recreación está asociada al consumo.

Por otra parte, ante la disminución de las funciones del Estado, buena parte del mantenimiento o las mejoras de las zonas urbanas han quedado en manos privadas, como el reciclado de áreas abandonadas o descuidadas y la construcción de autopistas. Esto ha dado lugar a que surjan urbanizaciones que no siempre siguen las normas de edificación o no tienen en cuenta las necesidades globales de desarrollo de los pobladores de una ciudad.

Otro cambio propio del último decenio del siglo XX es la migración hacia los suburbios. La falta de seguridad y la complejidad creciente de la vida en las grandes ciudades han incentivado el traslado masivo de sectores pudientes y de clase media alta hacia la periferia. Así nacieron los barrios cerrados con servicios de seguridad privada, especie de «fortalezas» que no son más que el reflejo de la segmentación social de los últimos años.

Por último, las formas de expresión y movilización de los argentinos también han cambiado. Pese a la instalación del terror estatal en la Argentina a mediados de los 70, asistimos luego de la guerra de las Malvinas a un verdadero estallido de movilizaciones populares que hacían hincapié en temas tales como la democracia, los derechos humanos y sociales y la defensa de las libertades. Si bien eran notablemente diferentes de aquellas de principios de los 70, aún se pensaba la voluntad política de las mayorías como capaz de torcer el rumbo de los acontecimientos. Hacia fines de los 80, la realidad dio paso a coyunturas políticas menos dramáticas (no había ya posibilidades de golpe) pero poco propicias para generar entusiasmos colectivos. La democracia política y la economía aparecen como aspectos de la realidad poco menos que imposibles de modificar, lo que redundó decididamente en un aumento del escepticismo, la falta de participación y el individualismo. Los reclamos sociales de estos últimos años se manifiestan casi siempre al margen de los partidos políticos o las organizaciones sindicales. El ejemplo

más contundente es la movilización de sectores de la población que antiguamente aparecían integrados a otros grupos, como los jubilados, que comenzaron a manifestarse en forma autónoma para hacer frente al retroceso del sistema previsional.



La muerte de la adolescente María Soledad Morales, en septiembre de 1990, provocó masivas «marchas del silencio» en la provincia de Catamarca, una forma de protesta radicalmente diferente en relación con las instrumentadas en el pasado.

Las «marchas del silencio» constituyen otra forma de protesta contra los abusos policiales o del poder, sobre todo en el interior del país. A nivel local, también los vecinos suelen organizarse para defender los derechos que consideran lesionados por las autoridades o la acción de otros actores sociales. En esos casos, es muy común que acudan a los medios de comunicación para lograr que su pedido o protesta tome estado público.

Llenar la democracia de contenido, canalizar estas inquietudes sociales y reconstituir las redes de solidaridad son los nuevos desafíos para la sociedad argentina de comienzos de siglo.

**Del libro:**

Miranda, E. – Colombo, E., (2000), Historia Argentina Contemporánea, Kapelusz, Buenos Aires.

**Texto:**

“La política. El Proceso de Reorganización Nacional”, Páginas 277 a 279.

**A-** Antes de leer los textos propuestos, elaborará una posible definición de Estado terrorista.

**B-** Respondé:

¿Cuáles fueron los motivos de la represión y cuál fue su respaldo ideológico? Para ello podés consultar el capítulo V del Informe de la CONADEP.

**C-** En función de lo leído y discutido, reelaborará el concepto enunciado en A.

**Texto:**

“La economía. La política económica del Proceso”, Páginas 287 y 288, 290 y 291.

- **Respondé:** ¿Por qué se puede considerar que las políticas económicas implementadas por la Dictadura militar fueron de corte neoliberal?

**Texto:**

“La economía en el período radical”.

“Las transformaciones económicas y el fin del Estado benefactor”.

Páginas 291 a 295.

**Respondé:**

- ¿Cuáles fueron las causas de que se profundizara el modelo neoliberal en la década del noventa?
- ¿Por qué se considera que es el “fin del Estado benefactor”?

**Texto:**

“La sociedad. El reacondicionamiento de los sectores sociales argentinos”, Páginas 295 a 298.

- **Respondé:** ¿Por qué se habla de polarización social?
- Proponé un título nuevo para el texto.

**Texto:**

“El movimiento obrero, del Proceso al gobierno de Menem”, Páginas 298 a 301.

**Respondé:**

- ¿Qué conflictos se plantearon en el movimiento obrero?
- ¿Cuáles fueron los cambios principales que experimentó desde la etapa de los primeros gobiernos de Perón?

**Texto:**

“La sociedad argentina en el nuevo siglo”, Páginas 301 y 302.

Elaborá un listado de temas que requieren de urgente solución en la Argentina actual.